

El Gobierno ultraconservador ahonda en el control de los campus a través de privatizaciones a fundaciones afines

# Hungría desmonta la Universidad pública

GLORIA RODRÍGUEZ-PINA, Madrid  
Las universidades públicas se han convertido en una rareza en Hungría. Apenas quedan cinco universidades y un colegio universitario públicos, después de que el Gobierno ultraconservador de Viktor Orbán haya transferido la propiedad de una veintena de universidades y centros de enseñanza superior del Estado a fundaciones privadas. En las juntas de esos organismos se sientan ministros, altos cargos y personas afines a Fidesz, el partido de Orbán. En octubre, todos los patronatos han ofrecido al unísono devolver voluntariamente el 4% de su presupuesto para ayudar al Ejecutivo a controlar la inflación, un movimiento que algunos críticos ven como un golpe más a la autonomía de las universidades.

El camino hacia una suerte de privatización de la enseñanza superior —la propiedad ya no es estatal, pero la principal fuente de financiación sigue siendo el presupuesto público— comenzó en 2019, con el traspaso de la propiedad de la Universidad Corvinus de Budapest del Estado a una fundación. El proceso tomó el impulso definitivo en abril de 2021, cuando el cambio de modelo de titularidad de los campus públicos a fundaciones privadas de gestión de activos de interés público se convirtió en ley, en un movimiento interpretado por algunos voces como un intento de Orbán de controlar la esfera académica y cultural. Las protestas se han reiterado en estos años y se fortalecieron la semana pasada tras el despido de ocho profesores.

El Gobierno de Fidesz, después de reformar las leyes de conflictos de intereses, colocó al frente de las fundaciones que gestio-

nan las universidades a los suyos. Los puestos son vitalicios y tienen el poder de nombrar a sus sucesores. Los patronatos gestionan el patrimonio de las universidades —del que el Estado ha perdido la propiedad y el control directo—, como los 50 activos inmobiliarios y casi 10 millones de participaciones en una farmacéutica de la Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud Semmelweis.

Organizaciones que investigan la corrupción denuncian que el partido se ha garantizado con esta fórmula el control de esos activos, incluso si pierde unas elecciones, como explica Transparencia Internacional Hungría en su *Black Book II. Corruption and State Capture in Hungary (Libro Negro II. Corrupción y captura del Estado en Hungría)*. La Comisión Europea, que el pasado 30 de noviembre propuso congelar 7.500 millones de euros al país por la corrupción y el deterioro del Estado de derecho, ha mostrado su preocupación por este tipo de organismos por el riesgo de corrupción que entraña que diputados y altos cargos del Gobierno, sin responder a normas de conflictos de intereses, gestionen grandes cantidades de dinero público sobre los que el Estado ha perdido el control directo.

Después de la cruzada de Orbán en 2017 para expulsar del país a la Universidad Centroeuropa (CEU, en sus siglas en inglés), financiada por el filántropo estadounidense de origen húngaro George Soros, y del desmantelamiento en 2019 de la Academia Húngara de las Ciencias (HAS), con la universidad la cuestión que más temen muchos académicos es el riesgo que el cambio de modelo puede suponer para la li-



Un joven sostenía el 23 de octubre una pancarta que dice: “¿Quién nos enseñará mañana?”, en una marcha por la educación en Budapest. / GETTY

“Los académicos todavía están en ‘shock’”, dice un exministro de Orbán

Solo quedan seis instituciones del Estado de la veintena que había

bertad académica. Para Gábor Toronyai, profesor en la Universidad Corvinus y líder sindical, el Gobierno “busca colocar a los suyos en posiciones de poder y dar forma a la faceta cultural de la sociedad húngara”. “La autonomía de las universidades se ha perdido”, lamenta el sindicalista.

Las juntas de las fundaciones también eligen al rector y, como explica József Pálínkás, que fue ministro de Educación de 2001 a 2002, en el primer Gobierno de Fidesz, profesores y académicos han dejado de ser empleados públicos. “Hay preocupación por el control ideológico”, señala. “Los consejeros pueden despedir sin dar explicaciones”, dice.

“El Gobierno no quería que las universidades tuvieran la fuerza que solían tener, sobre todo cuando se unían para expresar su opinión”, señala Pálínkás, que añade que “los académicos todavía están en shock”. El que fuera también presidente de la Academia de las Ciencias recuerda que cuando él ejerció ese cargo su voz era escuchada cuando hacía una denuncia pública. Ahora, lamenta, el Gobierno “ha arrebatado el prestigio a los académicos”.

El Ejecutivo defiende el cambio de modelo asegurando que el nuevo sistema permite a los centros acceder a más financiación, a un sistema de empleo basado en el rendimiento y a mejores infraestructuras. Entre otros objetivos, busca una mejora de la calidad y de la clasificación de las universidades húngaras en las clasificaciones mundiales, en los que han ido perdiendo puestos (no hay ninguna entre las 500 mejores).

En 2020 el Gobierno forzó el cambio de sistema en la Universidad de Arte Dramático y Cine, y la decisión fue fuertemente contestada con protestas estudiantiles y la marcha de profesores, que crearon un centro independiente. Aprenda la lección, ahora son los claustros de las universidades los que toman la decisión de pasar al sistema de fundaciones. Orbán prometió millones de financiación a las universidades y aseguró que invertiría unos 3.600 millones de euros provenientes de fondos europeos. Esos presupuestos redoblados, que incluyen importantes subidas salariales, e incluso para los profesores en edad de jubilación la posibilidad de cobrar la pensión a la vez que el sueldo íntegro, son incentivos decisivos para el cambio en un país que registra uno de los salarios más bajos del personal docente en Europa.

En los círculos universitarios se dice que el Gobierno les presiona para cambiar de modelo, pero un dirigente académico de una pública, que prefiere mantener el anonimato, asegura que en su caso no es así, aunque reconoce que sí hay una negociación con el Ejecutivo. “[Las universidades que han hecho el cambio] reciben más fondos del Gobierno, tienen salarios más altos y tienen normas y condiciones más flexibles para el desarrollo de la universidad”, destaca.